

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	MARTA ELENA ORTIZ RODRÍGUEZ
DEMANDADO	COLPENSIONES.
RADICADO	05001-31-05-004-2019-0268-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	SUSTITUCION PENSIONAL
DECISIÓN	REVOCA - CONFIRMA

Medellín, veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **MARTA ELENA ORTIZ RODRÍGUEZ**, contra **COLPENSIONES**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 020**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ANTECEDENTES

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de COLPENSIONES, contra la sentencia que profirió el

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 02 de septiembre de 2022, dentro del proceso referenciado, y a su vez conocer dicha sentencia en Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, de conformidad al artículo 69 del CPT y SS.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que el señor GILBERTO DE JESUS MONÁ FIGUEROA, es pensionado del ISS, mediante resolución N° 2419 del año 1985.

Refiere el introductorio que, GILBERTO DE JESUS MONÁ FIGUEROA, falleció el 21 de agosto del año 2018, y que le sobrevive su compañera permanente MARTA ELENA ORTIZ RODRÍGUEZ, con quien compartió techo, lecho y mesa desde el año 2007, hasta el 21 de agosto de 2018. Los primeros cinco años, en el hogar Sendero de Luz, y que posteriormente, se trasladaron a vivir con una hija el señor MONÁ, llamada Patricia, convivencia que, en todo caso, se extendió hasta su deceso.

Narra la demanda que, mediante la resolución SUB 270222 del 17 de octubre de 2018, proferida por COLPENSIONES, se niega la pensión de sobreviviente a la demandante, por no acreditar el tiempo mínimo de convivencia y mediante la resolución SUB 326061 del 18 de diciembre de 2018, emitida por COLPENSIONES, se confirma en todas sus partes, la negativa de la prestación económica.

Indicó la demanda que, COLPENSIONES, basada en la investigación administrativa, hace una inadecuada valoración probatoria y recolección de las pruebas, que llevaron a la entidad, a negar la prestación económica y, en definitiva, a realizar una errada conclusión del asunto.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se DECLARE que la señora MARTA ELENA ORTIZ RODRÍGUEZ, es beneficiaria del 100%, de la pensión de

sobrevivientes, del señor GILBERTO DE JESUS MONÁ FIGUEROA, quien tiene condición de pensionado.

Y, en consecuencia, que se **CONDENE** a **COLPENSIONES** a: **i)** Reconocer y pagar las mesadas, desde el momento de su causación y hasta la terminación del proceso a favor de MARTA ELENA ORTIZ RODRÍGUEZ. **ii)** Reconocer y pagar la indexación de las mesadas causadas y no pagadas. **iii)** Reconocer intereses moratorios desde que las mesadas se hicieron exigibles. **iv)** Reconocer el pago de las costas procesales y agencias en derecho.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

COLPENSIONES dio respuesta oportuna a través de su apoderado judicial, según consta en el archivo PDF N° 1 folio 58, aceptando como ciertos los hechos relativos a la vinculación del causante a la administradora de pensiones y la reclamación administrativa presentada por la demandante.

Agregó la entidad que, de acuerdo a la investigación administrativa, la solicitante no tiene la calidad de beneficiaria de la prestación económica que reclama.

A título de excepciones de mérito planteó las siguientes: *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN POR FALTA DE REQUISITOS LEGALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LO SOLICITADO. PRESCRIPCIÓN, COMPENSACIÓN, BUENA FE DE COLPENSIONES, IMPOSIBILIDAD EN COSTAS”*

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de apelación, el A Quo en audiencia pública de juzgamiento, celebrada el 02 de septiembre de 2022, condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagar sustitución pensional a favor de la señora MARTA ELENA ORTIZ RODRÍGUEZ, en calidad de compañera permanente del pensionado GILBERTO DE JESUS MONÁ FIGUEROA.

En consecuencia, condenó a COLPENSIONES, a reconocer y pagar en favor de la señora MARTA ELENA ORTIZ RODRÍGUEZ, el retroactivo correspondiente, cuyo valor asciende a la suma de **\$47.128.368**, calculado desde la muerte del causante y hasta el último día del mes de septiembre de 2022. A la par dispuso que, a partir del 1 de octubre de 2022, COLPENSIONES, deberá reconocer pensión a la demandante, en cuantía de un (1) SMLMV, en razón de 13 mesadas, sin perjuicio de los incrementos, e impuso condena por intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, a partir del 04 noviembre de 2018, liquidación que debe hacer COLPENSIONES mes a mes, en los términos señalados, en el artículo referenciado.

Además, autorizó a COLPENSIONES a descontar del retroactivo del reajuste pensional, que corresponde a la demandante, los aportes a la seguridad social en salud, y ponerlos a disposición de la EPS en que se encuentre afiliada la demandante.

Como fundamento de su decisión, (PDF 15) estimó el juez de primer grado que: **i)** La demandante pretende una sustitución pensional, y para ello, aduce condición de compañera permanente respecto del **pensionado** GILBERTO DE JESUS MONÁ FIGUEROA, quien de acuerdo a la resolución 2419 de 1985, del ISS, le fue reconocida **pensión de invalidez**, prestación que al retiro de nómina equivale a la suma de \$781.242, es decir, de un SMLMV **ii)** Que si bien COLPENSIONES realizó investigación administrativa, a través de la cual se concluyó que la demandante no acredita el tiempo mínimo de convivencia, lo cierto es que, la prueba arrojada al proceso, demuestra lo contrario, esto es, que MARTA ELENA ORTIZ RODRÍGUEZ y GILBERTO DE JESUS MONÁ FIGUEROA, sostuvieron una convivencia por más de 11 años.

Para arribar a lo anterior, el A quo resaltó los siguientes medios de prueba: **1)** De la práctica de interrogatorio de parte, absuelto por la demandante, destacó el sentenciador que, si bien la actora no da muchas fechas concretas de los extremos temporales de la relación, a raíz de la poca fluidez que presenta al hablar, no obstante, acentuó, que la demandante, refirió datos importantes de la convivencia con el causante. **2)** De la prueba documental, en especial del certificado de NUEVA EPS, concluyó el A quo, que la señora MARTA ELENA ORTIZ RODRÍGUEZ, tenía condición de beneficiaria

en salud del causante, desde el año 2012 al año 2018, y además se destacó, de la investigación administrativa, la declaración de la directora del hogar Sendero de Luz, quien acreditó que la pareja, inició la convivencia en dicho centro geriátrico. **3)** Finalmente resaltó, las cuatro declaraciones testimoniales rendidas a instancia de la parte demandante, dos de ellos familiares y dos más amigos de la pareja.

En definitiva, expuso el A quo, que, tras valorar el recaudo probatorio, es claro que la pareja inició la relación en el centro geriátrico, lugar en donde permanecieron juntos por cinco años y que luego, entre los años 2012 a 2018, Marta y Gilberto, convivieron en la casa de una hija del causante, cohabitando por un lapso total de 11 años juntos, sin que se demostrara que en algún momento se hubiesen separado.

De otro lado, el juez de la primera instancia, le restó credibilidad a la investigación administrativa realizada por Colpensiones, por cuanto a su juicio, en la misma no se identificó de manera clara y precisa a los declarantes, por sus nombres completos, identificación y ubicación, y que, además, tales declarantes, no rindieron declaración bajo juramento y menos ratificaron su dicho en el trámite del proceso judicial.

Finalmente, condenó a intereses moratorios a Colpensiones, bajo la consideración de que la entidad no efectuó en debida forma, la valoración del recaudo probatorio y que en especial, en la investigación administrativa, se actuó con ligereza, pues no se hizo un debido razonamiento de la narrativa de los declarantes, y se dejó en desamparo a la demandante.

VI. – RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

La sentencia de primera instancia fue apelada por el apoderado judicial de COLPENSIONES, quien argumentó que difiere de la decisión adoptada por el juez de la primera instancia, en especial con el reconocimiento de la sustitución pensional, el retroactivo pensional y el pago de los intereses moratorios, por cuanto, para la entidad administradora de pensiones, no se acreditó el requisito de la convivencia mínima entre la demandante y el

causante, y para ello, se apoyó en las conclusiones generales de la actuación administrativa, las cuales a su entender, merecen plena credibilidad.

Con base en lo anterior, pidió sea revocada la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se absuelva a la entidad, de todas las pretensiones imploradas.

Alegatos de conclusión.

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente el **apoderado judicial de la demandante**, señaló que la apoderada de COLPENSIONES presentó recurso de apelación, argumentando que no se está de acuerdo con la condena de reconocer la sustitución pensional, su retroactivo y la condena de pago de intereses moratorios, en favor de la señora MARTA ELENA ORTIZ RODRIGUEZ; y basa su argumentación, en la investigación administrativa, sin embargo, la entidad, no tiene en cuenta, las pruebas decretadas y prácticas en el proceso por el juez de instancia, esto es, los testimonios brindados por: REINALDO DE JESÚS ÁLVAREZ, SOCORRO ELENA PALACIO PALACIO, EDILMA CHAVERRA DE QUINTO y PATRICIA MONA, en los cuales, se aprecia, sin lugar a dudas que entre la señora MARTA ELENA ORTIZ RODRIGUEZ, y el señor GILBERTO DE JESUS MONA FIGUEROA, existió una unión marital de hecho desde el año 2007 hasta el año 2018, convivencia que fue permanente, constante, e ininterrumpida iniciando en el hogar geriátrico SENDERO DE LUZ, donde compartían la misma habitación y la misma cama; y donde se daban trato de marido y mujer, trato reconocido y aceptado por el personal del hogar geriátrico, como por los familiares y amigos cercanos a la familia MONA.

Agregó además, que en el proceso quedó demostrado que en el año 2012, la señora PATRICIA MONA, retiró del hogar geriátrico a la señora MARTA ELENA ORTIZ RODRIGUEZ, y al señor GILBERTO DE JESUS MONA FIGUEROA, y que la convivencia de estos, continuó sin interrupción alguna, en varias residencias; primero en el barrio Manrique, luego en el barrio Campo Valdés y posteriormente en el barrio Boston, donde dormían en la misma habitación, en la misma cama y donde su trato era el de marido y mujer.

Con base en lo anterior, solicitó el apoderado de la parte demandante, que se confirme íntegramente el fallo de primera instancia.

Por su parte, el **apoderado judicial de COLPENSIONES**, manifestó que de cara a validar la real y efectiva convivencia entre la demandante y el pensionado fallecido, la entidad realizó investigación administrativa, la cual obra en el expediente digital, de la cual se concluye que: *“no se acredita el contenido de la veracidad de la solicitud presentada por MARTA ELENA ORTIZ RODRIGUEZ...”* y apoyado en lo anterior, aseguró que la señora ORTIZ RODRIGUEZ, no logró demostrar que compartió techo, lecho y mesa con el causante, situación que a su juicio, tampoco se acreditó al interior del proceso, pues reiteró que, no existen pruebas suficientes que permitan determinar dicha convivencia, requisitos indispensables para acceder a la prestación pretendida, razón por la cual debe negarse las suplicas de la demanda.

Asimismo explicó que la investigación administrativa, es un elemento de apoyo técnico idóneo, en virtud del cual, la entidad logra esclarecer con un grado de verdad, más allá de toda duda razonable, la calidad de beneficiaria o no de una prestación económica, razón por la cual, concluye que debe dársele absoluta y total credibilidad a la investigación administrativa, pues la misma fue realizada por personal calificado, y fueron entrevistados familiares, conocidos y vecinos de los lugares donde presuntamente se realizó la convivencia y debe por tanto, dársele el valor probatorio conforme a la sana crítica.

De otro lado, y frente al tema de los intereses moratorios, señaló el apoderado judicial que, los mismo no son procedentes, en atención a que desde la misma entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, estos se establecieron, como un mecanismo de sanción por un retardo injustificado en el cumplimiento de una prestación derivada del sistema de seguridad social. Igualmente fueron establecidos como mecanismo de protección respecto a derechos incorporados en el patrimonio del trabajador, situación que no es del caso habida cuenta que **solamente hasta esta instancia judicial, se resolvió la calidad de beneficiaria.**

En mérito de lo anterior, pidió a este Tribunal, se revoque la sentencia de primera instancia, y en su lugar se absuelva a Colpensiones de todas y cada una de las condenas impuestas.

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión. – sustitución pensional

Teniendo en cuenta los puntos objeto de apelación, mismos que delimitan la competencia de esta Sala en la segunda instancia, los problemas jurídicos estriban en dilucidar: Teniendo en cuenta los puntos objeto de apelación, así como el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES en aquellos aspectos desfavorables de la sentencia de primera instancia, la controversia jurídica que debe resolverse, consiste en determinar si la señora MARTA ELENA ORTIZ RODRIGUEZ, en su calidad de compañera permanente, acredita o no los requisitos legales para ser considerada beneficiaria de la sustitución pensional causada con el fallecimiento del pensionado GILBERTO DE JESUS MONA FIGUEROA, en caso afirmativo, se establecerá la fecha del disfrute pensional, el porcentaje pensional que le corresponde a la eventual beneficiaria, el valor del retroactivo, así como la procedencia o no de los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, o en su defecto la indexación de las condenas.

Para resolver lo pertinente, la Sala parte de los supuestos fácticos que no son objeto de controversia, que son los que a continuación se enuncian:

- ❖ La muerte del afiliado GILBERTO DE JESUS MONA FIGUEROA, insuceso acaecido el 21 de agosto de 2018, hecho que se prueba con el registro civil de defunción que obra en el pdf 01 folio 25.

- ❖ Que en la Resolución SUB 270222 del 17 de octubre de 2018, proferida por COLPENSIONES, se aduce que el causante GILBERTO DE JESUS MONA FIGUEROA, por medio de la **resolución 2419 de 1985, del ISS, le fue reconocida pensión de invalidez**, prestación que al retiro de nómina equivale a la suma de \$781.242. Mediante la citada resolución 270222, se negó la sustitución pensional invocada por la demandante. pdf 01 folio 45.
- ❖ Resolución SUB 326061 del 18 de diciembre de 2018, emitida por COLPENSIONES, a través de la cual, se confirma en todas sus partes, la negativa de la prestación económica. Pdf 01 folio 49.
- ❖ Certificación expedida por NUEVA EPS, mediante la cual acredita que la demandante tuvo condición de beneficiaria del causante entre los años 2012 a 2018. Pdf 7.

Ahora bien, no existiendo discusión frente a la causación del derecho pensional como tal, por tratarse del **fallecimiento de un pensionado**, la problemática qua pasará a analizar la Sala consiste en determinar si la señora MARTA ELENA ORTIZ RODRIGUEZ, logró acreditar el requisito legal de convivencia mínima, para ser considerada beneficiaria del derecho pensional que reclama, al tenor de lo dispuesto en el literal a) del art. 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art. 13 de la ley 797 de 2003, que era la normatividad vigente en que falleció el señor GILBERTO DE JESUS MONA FIGUEROA, veamos:

“ARTÍCULO 13: Los artículos 47 y 74 quedarán así:

Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

*En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, **el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.** (Negrillas de la Sala).*

(...).”

Convivencia con el causante

En relación con el requisito de convivencia al que alude el literal a) de la citada normativa, la jurisprudencia de Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, CSJ SL, 20 may. 2008, rad. 32393, CSJ SL, 22 ago. 2012, rad. 45600, CSJ SL793-2013, CSJ SL1402-2015, CSJ SL14068-2016, y SL-347 de 2019 había sostenido el criterio, según el cual *“...para ostentar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, tanto para cónyuge como para compañero o compañera permanente, la convivencia debe ser de cinco (5), independientemente de si el causante de la prestación es un afiliado o un pensionado...”*.

Sin embargo, luego de reexaminar la referida problemática, la Alta Corporación judicial fijó una nueva doctrina en torno a la interpretación del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Encontrando, que no era posible inferir que en tratándose de la muerte de un afiliado, el legislador hubiese exigido un tiempo mínimo de convivencia de 5 años, por manera que ese interregno temporal solamente resultaba necesario acreditarlo en caso del deceso de un pensionado, así se expresó en la sentencia SL1905-2021, donde se sostuvo lo siguiente:

“...En síntesis, pueden extraerse dos reglas [...] que fijan el alcance y la correcta interpretación del artículo 13 de la Ley 797 de 2003: i) La pensión de sobrevivientes en materia de afiliados al sistema de seguridad social, no exige un tiempo mínimo de convivencia para acreditarse como beneficiarios la cónyuge o la compañera permanente y, ii) No existe un trato diferenciado para la aplicación de la regla anterior, es decir, no importa la forma en la que se constituya el núcleo familiar, vínculos jurídicos o naturales, la protección se dirige al concepto de familia (artículo 42 de la C.P.), luego el análisis se circunscribe en estos casos a la simple acreditación de la calidad requerida y la conformación del núcleo familiar con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte (al respecto, se puede consultar entre otras sentencias CSJ SL3843-2020, CSJ SL5626-2020).”

No obstante, la jurisprudencia de la Corte Constitucional aún persiste en exigir convivencia mínima tratándose de afiliado fallecido, como puede verse en la sentencia SU149 de 2021:

“...El recuento jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia evidencia que la interpretación pacífica y reiterada del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003), hecha por esa alta Corporación, estableció el criterio de que los cónyuges o compañeros permanentes supérstites deben demostrar su convivencia con el (la) causante, indistintamente de que este último fuera pensionado o afiliado al momento de su fallecimiento y, por lo menos, durante los cinco años continuos antes de este suceso. Entre las razones que ha expuesto la Corte Suprema de Justicia para exigir el requisito de convivencia a beneficiarios de pensionados y afiliados, sin distinción, se encuentra, en primer lugar, que la simple condición de pensionado no es una razón para establecer una diferencia entre los beneficiarios que integran el grupo familiar de este y del afiliado. En segundo lugar, la convivencia es un elemento indispensable para considerar que el cónyuge o compañero(a) permanente hace parte del grupo familiar del pensionado y afiliado, establecidos por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 como únicos beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. En tercer lugar, la Ley 797 de 2003 sólo modificó el tiempo exigido de convivencia con el pensionado o afiliado, mas no alteró el concepto de beneficiario de la pensión de sobrevivientes...”

Y si bien con esta providencia del año 2021, el órgano de cierre se aparta de la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a la problemática del afiliado fallecido, ambas Cortes confluyen en la exigencia de acreditar convivencia mínima tratándose de pensionado fallecido, que es precisamente el asunto que interesa a esta litis.

Resulta entonces indispensable, para acceder a la sustitución pensional **(muerte de pensionado)**, tratándose de compañero permanente, el cumplimiento de una convivencia real y efectiva, de mínimo 5 años, lo que de no demostrarse hace perder la calidad de beneficiario, tornándose en un requisito ineludible en la acreditación del derecho a dicha prestación.

CASO CONCRETO

Teniendo en cuenta lo anterior, pasa la sala a determinar si la demandante MARTA ELENA ORTIZ RODRIGUEZ, en condición de compañera permanente del causante, logró acreditar o no los requisitos para ser considerada beneficiaria de la sustitución pensional que reclama por el fallecimiento del afiliado pensionado GILBERTO DE JESUS MONA FIGUEROA.

- ❖ En el interrogatorio de parte absuelto por la demandante—(Audio 12 minuto 14:00), manifestó que es ama de casa, y fue compañera de GILBERTO DE JESUS MONA FIGUEROA. Dijo que no sabe leer, ni firmar y que no tiene hijos. Que conoce a GILBERTO hace mucho tiempo, pero que no sabe cuántos años convivieron, ni la fecha en que éste murió. Que conoció a Gilberto en Sendero de Luz, lugar en donde dormían juntos. Relató que lo quería mucho y que nunca se separaron. Expresó finalmente que vive con Patricia, hija del causante. (El juez dejó constancia que, si bien la demandante tiene dificultades para hablar con fluidez, al proceso no se anexó historia clínica que dé cuenta que la misma tiene algún impedimento para rendir declaración o que presente problemas psicológicos)
- ❖ Asimismo, conviene destacar la declaración de REINALDO DE JESUS ALVAREZ (Audio 12- minuto 40:00) testigo traído a instancia de la parte demandante, quien declaró que es pareja de la señora Patricia (hija del causante). Expuso que no tiene ninguna familiaridad con la demandante, pues la conoció, por Patricia, hija del señor Gilberto. Agregó el testigo que, el señor Gilberto fue llevado al centro geriátrico Sendero de Luz en el año 2007, y que, en ese lugar, se conoció con Marta. Que supo que, ellos iniciaron una relación en el centro geriátrico y que, en ese lugar, dormían juntos, pues él y su pareja visitaban con frecuencia a Gilberto. Aseguró que el asilo Sendero de Luz, queda en Prado Centro, lugar en donde estuvo Gilberto desde el año 2007 hasta el año 2012 y que luego, la pareja se fue a vivir con Patricia en el Barrio Campo Valdez. Indicó el declarante que para el momento en que ingresó Gilberto al asilo, Marta ya estaba internada, y que desconoce, quién la internó. En el minuto 47:36 de la grabación, el juez le preguntó al declarante, por qué tenía conocimiento de que Marta y Gilberto vivían juntos en el asilo. Respondió: *“ellos antes tenían su pieza aparte, luego cuando nosotros empezamos a visitarlos, **detectamos que ellos tenían mucha confianza, que siempre estaban juntos, compartían todo lo que se les llevaba, y luego ya se supo en el asilo que ellos tenían su relación y empezaron a compartir pieza, y luego cuando fueron a salir, se fueron a la casa de Patricia, en el año 2012. Patricia, como la familia, detectábamos que siempre estaban juntos, las hermanas de Patricia y yo, y las muchachas después, le llevaban las cositas a ella también. Compartían cama también, como una pareja establecida**”* (minuto 49:26) Luego, **señaló que no tiene claro, cuando inició la relación, si pasado año y medio o dos años, desde que Gilberto ingresó al asilo.** Aseguró que Gilberto afilió a la demandante en la NUEVA EPS, en el año 2012, y que, para ese

entonces, él rindió la declaración extrajuicio juramentada de la convivencia de la pareja. Aseveró, además, que en la familia se comentó que, a Marta, se le está adelantando un proceso de interdicción, pues a su juicio, la demandante necesita una persona para todos sus actos. Dijo, además, que no puede atestiguar si Gilberto sostenía a Marta, sin embargo, aseguró que **existía mucho afecto y amor entre la pareja.**

❖ Igualmente compareció la señora SOCORRO ELENA PALACIO PALACIO, (Audio 12 minuto 1.18:20) testigo traída a instancia de la parte demandante, quien explicó que es conocida de la pareja. Que a la señora Marta la conoció, cuando estaba en el asilo. Preciso que era muy cercana a las hijas del señor Gilberto, más o menos, desde el año 1975, compartían en fiestas y cumpleaños. **Atestó que no vio de manera directa, que la pareja durmiera en la misma habitación en el asilo,** pero que, las hijas de Gilberto, si le comentaba del asunto. Dijo que vive en California Estados Unidos, desde el 30 abril del año 2022. **Comentó a su vez, que la pareja se enamoró en el asilo, sin embargo, no sabe desde cuando empezaron a vivir juntos,** pero que, si sabe, que desde el año 2012, se fueron a vivir con la hija de Gilberto. Finalmente dijo que, Marta tiene problemas para hablar, y que desconoce si se ha adelantado proceso de interdicción.

❖ De la misma forma, rindió declaración EDILMA CHAVERRA DE QUINTO, (audio 13) quien refirió, que conoce a Marta porque era la compañera de Gilberto. Que Patricia hija de Gilberto, se los llevó a vivir con ella en el año 2012. Indicó que sabe de su dicho, por cuanto conoce a las hermanas Mona, y una de ellas fue su vecina, y que, de manera frecuente, compartían en reuniones con esa familia, y que justamente en esos escenarios, conoció a Gilberto, a su difunta esposa y luego a Marta. En el (minuto 9:36) el juez le preguntó a la testigo, desde cuando la pareja convivía en el ancianato y respondió: ***“cuando estaban en el ancianato ellos eran pareja, yo tomaba el bus de Villa Hermosa, y ese bus pasaba por toda la puerta del ancianato, y ellos estaban sentados a la entrada, tomando el sol todos los días junticos”*** En el (minuto 11:40) el juez le preguntó a la testigo si en el ancianato la pareja compartían la misma morada o lecho, a lo cual respondió: ***“si compartía, no me tocó verlo, porque yo nunca fui a visitarlos al***

ancianato, pero según ellos, si compartían la habitación, mentirosa fuera si dijera que fui allá. En la casa de Patricia si compartían. Ellos tenían su habitación para los dos solos”

Por otra parte, resaltó la declarante que, Marta era muy melosa con el señor Gilberto, que, aunque ella es de pocas palabras, sus acciones lo dicen todo. Que Martha quedó muy triste, luego de la muerte de Gilberto y que llora mucho. En cuanto al aspecto económico, señaló que la pareja se sostenía con la pensión de Gilberto y que actualmente, toda la familia les colabora a ellas. (refiriéndose a patricia y a marta)

- ❖ En último lugar, rindió declaración OLGA PATRICIA MONA BEDOYA (minuto 44:40) hija del causante Gilberto. Expresó que es pareja del señor Reinaldo, que vive en el barrio Boston, hace cuatro años, lugar en donde murió su papá. Afirmó que no estudió y que siempre ha sido ama de casa, sabe leer y escribir. Respecto del conocimiento del asunto dijo: ***“Mi papá quedó viudo, por lo tanto, se metió a Sendero de Luz, allá conoció a Martica, comenzaron una relación de amigos, y martica siempre ha sido una persona muy especial, se empezaron a conquistar, y luego de un tiempo acá, comenzaron a vivir juntos en el hogar, como unos cuatro años viviendo juntos y luego mi papa me empezó a decir que, por qué no nos íbamos a vivir junticos, que muy rico salirse de allá, que quería tener una vida más estable con su pareja, que allá tenían una camita muy estrecha, muy pequeña. Ellos allá duraron del 2007 al 2012, cuando yo los saqué de allá y comenzamos una vida en Manrique, luego en la 49, que vivimos unos 6 añitos, después en Boston, que fue donde falleció y siguió la relación acá, ellos se amaban, siempre eran cogidos de la mano, él no la desamparaba, no la dejaba en paz, y yo siempre los he bregado, pues personas como ellos hay que tratarlos y cuidarlos”***. En el minuto 51:30, el juez le preguntó a la testigo, cuánto tiempo ella podría atestiguar que la pareja convivió juntos en la misma habitación, en Sendero de Luz. Respondió: ***“En Sendero de Luz cuatro añitos, lo puedo atestiguar, ellos duraron del 2007 a 2012 como pareja, pareja, cogiditos de la mano, acostaditos, con sus piquitos y cositas hasta el 2012”***. En el (minuto 57:06) el juez le preguntó a la testigo, respecto de las personas que en el trámite administrativo se relacionaron como vecinos, y respondió que no los conoce, que para su entender esas personas no existen. Añadió además en su relato, que solo procuraba llevar a la pareja a misa, sin embargo, enfatizó que Marta y Gilberto mantenían bailando en el balcón, y que, por esa situación, en la cuadra eran conocidos como los bailarines.

En el minuto 1.03.00, el juez interrogó a la testigo, si la demandante, tiene algún problema de salud, a lo cual respondió: ***“fuimos ahora ultimo donde el psiquiatra para que emitiera un dictamen para saber que daños ella podría tener, y lo que salió, es que ella es muy distraída, eso tiene un nombre, pero no sé. A ella, no se le ha iniciado proceso de interdicción ni nada de eso”.***

- ❖ En la investigación administrativa adelantada por COLPENSIONES, obrante en el pdf 1 folio 28ss, se recibió la declaración de cuatro personas, respecto de las cuales se aduce, son vecinos del sector, en donde vivían Marta y Gilberto, no obstante, todos coincidieron en manifestar que no los conocen.

En labores de campo se entrevistó a la señora Marcela Marín (vecina del sector), dirección de residencia barrio Manrique Medellín, quien manifestó estar viviendo desde hace 22 años en el sector, indicó no conocer al señor Gilberto de Jesús Mona Figueroa ni a la señora Marta Elena Ortiz Rodríguez.

Se diálogo con la señora Teresa (vecina del sector), dirección de residencia barrio Manrique Medellín, quien manifestó estar viviendo desde hace 30 años en el sector, manifestó no conocer al señor Gilberto de Jesús Mona Figueroa ni a la señora Marta Elena Ortiz Rodríguez, ya que nunca han habitado el sector.

También se entrevistó al señor Carlos Giraldo (vecino del sector) dirección carrera 49 con calle 69 barrio Campo Valdés de Medellín, quien manifestó estar viviendo desde hace 23 años en el sector, afirmó que nunca conoció a los señores Gilberto de Jesús Mona Figueroa y Marta Elena Ortiz Rodríguez.

Se diálogo con la señora Juliana Becerra (vecina del sector), dirección de residencia barrio campo Valdés de Medellín, quien manifestó estar viviendo desde hace 23 años en el sector, manifestó que nunca ha visto a los señores Gilberto de Jesús Mona Figueroa y Marta Elena Ortiz Rodríguez.

También se resalta de la investigación administrativa, la declaración de PAULA ANDREA POSADA MUÑETONES, directora del hogar geriátrico Sendero de luz, quien aseguró que, Gilberto, estuvo en el hogar del año 2007 al año 2012, y que luego, fue retirado por su hija Patricia. Que la pareja llevaba **cinco años en una relación, compartiendo habitación** hasta que Patricia los retiró del hogar.

Se entrevistó a la señora Paula Andrea Posada Muñetones, identificada con cedula 43638491, dirección calle 49G 89-200 barrio Calasanz de Medellín, número de contacto 3112589833 (directora del hogar geriátrico Sendero De Luz), quien manifestó que el señor Gilberto de Jesús Mona Figueroa estuvo como usuario en el hogar geriátrico por 6 años aproximadamente, no recuerda bien las fechas pero ingresó en el año 2007 hasta el 2012 aproximadamente cuando fue retirado por la hija llamada Patricia quien era la encargada de asumir los gastos del causante.

→ Expresó que la señora Marta Elena Ortiz Rodríguez (solicitante), fue otra usuaria del hogar y quien respondió por ella fue una cuñada la cual ya falleció, expresó que desde ese entonces el hogar se hizo cargo de ella, afirmando que la solicitante fue la pareja del causante quienes llevaban 5 años de relación estable compartiendo habitación hasta que la señora Patricia (hija causante), retiró a los implicados del hogar.

Se le solicitó libros de las visitas que registran los implicados como familiares o encargados de los mismos, de lo que indicó que únicamente solo maneja control de visitas con los usuarios del programa de la alcaldía de la ciudad de Medellín, aclarando que con las personas de servicio privado no manejan control de visitas.

Esta sala no pasa por algo ciertas contradicciones que se destacaron en el trámite administrativo, en particular, de la declaración rendida por OLGA PATRICIA MONA BEDOYA, quien dijo que cuando la pareja inició la relación, la cuñada (Marley Benjumea- familiar de Marta) había muerto hacía cuatro años, y que aquella, era la persona encargada de Marta en el hogar geriátrico. Que ella hacía 7 años (2011) retiró a la pareja del hogar, y se los llevó a vivir con ella.

La entrevistada indicó que la dirección de su residencia es carrera 40ª 57-40 barrio Boston de Medellín, contacto 5049214, informo que la solicitante convivió con su padre el señor Gilberto de Jesús Mona Figueroa inicialmente en el asilo Sendero De Luz de ubicado en Prado Centro de Medellín, después se trasladaron al barrio Manrique, después al barrio Campo Valdés y por último vivieron en el barrio Boston, indico que los implicados convivieron en unión libre bajo un mismo techo desde el 13 de marzo de 2007 hasta el día 21 de agosto de 2018 fecha en la cual falleció su padre, para un total de 11 años de convivencia, informó que entre ellos no procrearon hijos en común.

Indicó que su padre falleció el día 21 de agosto de 2018 en la casa ubicada en al barrio Boston en la carrera 40ª 57-40 de 76 años de edad a causa de muerte natural.

Como pruebas de su relación de convivencia aportó fotos y prendas de vestir, agregó que los trámites y pagos fúnebres los tramitó un nieto del causante.

Sobre la diferencia de edad (22 años), expresó que no fue impedimento para ellos para poder convivir bajo un mismo techo.

Agregó que cuando ellos iniciaron su relación la cuñada de la solicitante llamada Marleny Benjumea quien murió hace 4 años era la persona encargada de ella (solicitante) en el hogar de paso quien estuvo de acuerdo con la relación de los implicados así como la entrevistada también estuvo de acuerdo, agregó que ella (entrevistada) hace 7 años (2011), retiro a los implicados del hogar de paso y se los llevó a vivir con ella, según ella después de que la cuñada de la solicitante falleció ya que ella quedó sola y desamparada.

Nota: se resalta contradicciones frente al tiempo que indicó de haber fallecido la cuñada de la solicitante y del tipo que manifestó haber retirado a los implicados del hogar de paso por la muerte de la cuñada de la solicitante.

El ente investigador, resaltó de dicha manifestación dos contradicciones, frente al tiempo que señaló la declarante, haber fallecido la cuñada, y la segunda, respecto a la época en que fueron retirados los compañeros del hogar de paso.

Al cotejar esta información se advierte lo siguiente: la investigación administrativa fue realizada el **11 de septiembre de 2018**, y de acuerdo al registro de defunción de Marley Benjumea (familiar de Marta), obrante en el expediente PDF 01 folio 43, aquella falleció el **07 de agosto de 2013**, por lo que, se comprueba que, para la época de la entrevista, ya había transcurrido más de cinco años desde su deceso y no cuatro años como se informó. El otro yerro encontrado es respecto a la época en que salió la pareja del ancianato, pues, la declarante dijo que retiró a Marta y a Gilberto del hogar de paso, 7 años atrás, es decir, que, según su relato, ello ocurrió en el **año 2011**, y agregó que eso ocurrió, después de que la cuñada- Marley Benjumea- falleció; no obstante,

al confrontar estos datos, con la declaración que se rindió al interior de proceso, se advierte que según los testigos, la pareja salió del hogar, en el año 2012, y en dicha data la señora Marley Benjumea aún no había fallecido.

La otra contradicción que resalta el ente investigación en el trámite administrativo es que ninguno de los vecinos de la pareja aseguró conocerlos, y que, pese a que se le consultó de tal situación a la señora OLGA PATRICIA MONA BEDOYA, ésta respondió que el núcleo de familia (ella y la pareja) llevaban cinco meses viviendo en el sector, lo que a juicio del ente investigador es contradictorio, por cuanto los señores Gilberto y Marta, habían sido retirados del hogar, hacía 7 años.

Tras de validar la información verificada en las labores de campo en los dos barrios donde supuestamente se dio la relación de convivencia, se llamó a la señora Olga Patricia Mona Bedoya (hija causante), para verificar porque las diferentes personas entrevistadas en labores de campo manifestaron que nunca han conocido a los implicados, expreso que ellos en la dirección carrera 40ª 57-40 están viviendo desde hace 5 meses sitio donde murió el causante, expreso que posiblemente los vecinos no los conocen por que los implicados no salían de la casa.

Nota: se resalta contradicciones frente al tiempo que manifestó de vivir en la dirección anteriormente reportada (5 meses), frente al tiempo que indicó de haber retirado a los implicados del hogar de paso (7 años), donde según la hija del causante desde que salieron del hogar han vivido en esa dirección.

Para esta corporación esta contradicción no tiene mérito por cuanto al comparar la declaración inicial de la señora OLGA PATRICIA MONA BEDOYA, se comprueba que ésta fue clara al precisar que la pareja primero convivió en Sedero de Luz, luego en Manrique, después en campo Valdez, y finalmente en Boston.

Pues bien, para la sala, luego de una valoración conjunta de las pruebas arrimadas al proceso, y bajo las reglas de la sana crítica, existe la certeza suficiente para declarar satisfecho el requisito de convivencia mínima de cinco años entre MARTA ELENA ORTIZ RODRIGUEZ y el causante.

Lo anterior, por cuanto de acuerdo a las declaraciones de los testigos, es indiscutible, que la pareja inició su cohabitación en el hogar geriátrico Sendero de Luz, lugar en donde compartieron techo, lecho y mesa.

Al respecto se subraya la declaración de la directora de Sendero de luz en el trámite administrativo, quien manifestó que Marta y Gilberto, tuvieron una

relación en el hogar geriátrico de **cinco años**, de manera establece y compartiendo habitación. Por su parte la declarante OLGA PATRICIA, indicó que la pareja inició su relación en el asilo, y que, en ese lugar, permanecieron juntos por un lapso de **cuatro años**.

Ahora bien, la prueba testimonial es reiterativa en señalar igualmente, que desde el **año 2012**, hasta la época de fallecimiento del causante, los compañeros permanecieron unidos, y pernotaban juntos en compañía de la hija del causante Olga Patricia y que, para entonces, también se comportaban como pareja.

La Sala destaca la prueba documental anexa al proceso, y recaudada por el juez, a petición de parte demandante, relativa a certificación emitida por NUEVA EPS, quien acreditó que la señora MARTA ELENA ORTIZ RODRIGUEZ, tenía la condición de BENEFICIARIA en salud, del señor GILBERTO DE JESUS MONA FIGUEROA, del **25 de junio de 2012 al 30 de agosto de 2018**.

Asunto: Respuesta solicitud radicado N° 2019 - 0268

Respetados Señores

Reciba un cordial saludo en nombre de NUEVA EPS S.A., agradecemos su confianza al exponernos sus inquietudes.

En respuesta a la comunicación del asunto en referencia, una vez revisado su caso y validada la información en nuestro sistema, nos permitimos informar que la señora MARTA ELENA ORTIZ RODRIGUEZ identificada con cédula de ciudadanía número 44003100, se encontraba en calidad de beneficiaria compañera del señor GILBERTO DE JESUS MONA FIGUEROA identificado con Cédula de ciudadanía número 503805, con fecha de inicio del 25 de junio de 2012 al 30 de agosto de 2018 bajo esta condición y su estado es **CANCELADO** bajo la causal "RETIRO DEL SISTEMA".

Esperamos haber dado trámite a su solicitud y le expresamos nuestra permanente disposición para atenderlos, y aclararles cualquier inquietud surgida en torno al asunto que nos ocupa.

Cordialmente,


Ing. JESÚS EDUARDO ATARÁ SAINEA
Director Nacional de Afiliaciones
Vicepresidencia de Operaciones - NUEVA EPS S.A.
Elaboro Julio Castellblanco Cruz

Con base en lo anterior, para la sala no cabe duda que la convivencia entre MARTA ELENA ORTIZ RODRIGUEZ y el señor GILBERTO DE JESUS MONA FIGUEROA, se desarrolló por más de cinco años, de lo cual se concluye el cumplimiento del tiempo de **convivencia mínima de cinco años requeridos**, para que la demandante sea beneficiaria de la pensión de sobreviviente; por lo que habrá de CONFIRMARÁ la sentencia en ese punto.

Prescripción y retroactivo pensional

Al respecto estima la Sala que a la demandante MARTA ELENA ORTIZ RODRIGUEZ, le asiste derecho al disfrute de la sustitución pensional.

También se advierte, que no alcanzó a prescribir ninguna de las mesadas pensionales que componen el retroactivo pensional adeudado. Lo anterior, por cuanto la beneficiaria reclamó su derecho pensional, antes que transcurriese el término prescriptivo de 3 años al que aluden los arts. 488 del CPTSS y 151 del CPTSS, pues la actora el 3 de septiembre de 2018, presentó la reclamación administrativa, la cual fue negada por Colpensiones mediante Resolución SUB 270222 del 17 de octubre de 2018, decisión que fue recurrida por la parte actora, y que la accionada mantuvo incólume, a través de la Resolución SUB 326061 del 18 de diciembre de 2018, habiéndose presentado la demanda, el **23 de abril de 2019**.

En punto de la liquidación del retroactivo pensional, destaca este colegiado que, según la Resolución SUB 270222 del 17 de octubre de 2018, proferida por COLPENSIONES, el causante GILBERTO DE JESUS MONA FIGUEROA, le fue reconocida **pensión de invalidez** por medio de la **resolución 2419 de 1985**, prestación que al retiro de nómina equivale a la suma de \$781.242.

REPUBLICA DE COLOMBIA
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO
RADICADO No. 2018_10947571 **SUB 270222
17 OCT 2018**
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN TRÁMITE DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA
(SOBREVIVIENTES - ORDINARIA)
EL SUBDIRECTOR DE DETERMINACION DE LA DIRECCION DE PRESTACIONES
ECONOMICAS DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES, en uso de las atribuciones inherentes al cargo y,

CONSIDERANDO
Que por medio de la Resolución Nro. 2419 del año 1985, el Instituto de Seguros
Sociales reconoció y ordenó el pago de una pensión de invalidez a favor del
señor **MONA FIGUEROA GILBERTO DE JESUS**, quien en vida se identificó con
cédula de ciudadanía Nro. 503,805, prestación que al retiro de nómina
equivale a la suma de \$781,242.00.

Ahora bien, el juez de la primera instancia, liquidó el retroactivo pensional en la suma de \$47.128.368, sobre la cuantía de un (1) SMLMV en razón de **13 mesadas**, sin embargo, y como la pensión del señor GILBERTO DE JESUS, deviene causada desde el año 1985, en razón a lo dispuesto en el artículo 142 de la ley 100 de 1993¹, el causante era beneficiario de 14 mesadas al año,

¹ Los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de sectores públicos, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, en el sector privado y del Instituto de Seguros Sociales, así como los retirados y pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, cuyas pensiones se hubiesen causado y reconocido antes del primero (1o) de enero de 1988, tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta (30) días de la pensión que le corresponda a cada uno de ellos por el régimen respectivo, que se cancelará con la mesada del mes de junio de cada año, a partir de 1994.

empero, este aspecto no fue objeto de apelación por la parte interesada, esto es, la demandante, razón por la cual, se mantendrá incólume, la decisión adoptada por el A quo.

Bajo estos parámetros, debe decirse que la liquidación efectuada en primera instancia, no resulta contraria a los intereses de COLPENSIONES, que dé lugar a una modificación de la condena en virtud del grado jurisdiccional de consulta, estando también acertada la sentencia de primer grado, en cuanto se autorizó a COLPENSIONES a efectuar la deducción del aporte obligatorio con destino al subsistema de salud, en atención a la obligación legal contenida en el art. 143 de la Ley 100 de 1993.

Intereses moratorios

En relación con la pretensión consecuencial de los intereses moratorios, del artículo 141 de la ley 100 de 1993, estima esta corporación que los mismos no están llamados a prosperar en el sub lite, dado que el motivo por el cual se negó la prestación económica no fue otro distinto a que la demandante no acreditó los extremos de convivencia mínima, necesarios para la asignación del derecho pensional.

En la investigación administrativa, se recaudaron los siguientes medios de prueba: declaración de OLGA PATRICIA MONA BEDOYA, de los vecinos, de REINALDO DE JESÚS ÁLVAREZ, y de PAULA ANDREA POSADA MUÑETONES, directora del hogar geriátrico Sendero de luz. Igualmente, se tuvo en cuenta, registro fotográfico, y tras valorar las pruebas, se arribó a la siguiente conclusión:

PANORAMICA ASILO SENDERO DE LUZ

CONCLUSIÓN GENERAL

NO SE ACREDITÓ el contenido y la veracidad de la solicitud presentada por **Marta Elena Ortiz Rodríguez**, una vez analizadas y revisadas cada una de las pruebas aportadas en la presente investigación administrativa.

Ya que no se logró confirmar una relación de convivencia entre el señor Gilberto de Jesús Mona Figueroa y la señora Marta Elena Ortiz Rodríguez, ya que hay incoherencias y contradicciones en la información aportada por la hija del causante.

Se resalta que la solicitante no aportó su entrevista de manera voluntaria, ya que ella no habla y se evidencia que padece de algún problema mental que le impide tomar sus propias decisiones.

En labores de campo en dos barrios diferentes donde supuestamente se dio la relación de convivencia, los vecinos entrevistados manifestaron que nunca conocieron a la pareja implicada.

No hay credibilidad del testimonio aportado por las señoras Olga Patricia Mona Bedoya (hija causante) y Paula Andrea Posada Muñetones (directora del hogar geriátrico Sendero De Luz).

Para la sala, solo mediante este proceso judicial se logró la demostración del derecho pensional que invoca la demandante a su favor, y en particular, luego de valorada la prueba testimonial en su conjunto, junto con la de certificación emitida por NUEVA EPS que acreditó que la demandante tenía condición de beneficiaria en salud del causante por más de 5 años, documento que solo fue puesto en conocimiento de Colpensiones, en el trámite de este asunto judicial, pues se reitera, fue un medio de prueba invocado a instancia de la parte demandante y que el mismo no se relaciona en la investigación administrativa.

Así las cosas, y luego de la ponderación probatoria y la aplicación de la hermenéutica jurisprudencial, que se surtió en el trámite del proceso, es que, para esta sala, se llega al convencimiento que, en efecto, le asiste derecho a la demandante al reconocimiento de la prestación económica invocada.

De modo que la facultad interpretativa solamente le está conferida al administrador de justicia para la resolución de los conflictos que tiene bajo su competencia, y al ser ello así, la pasiva tenía elementos de ley suficientes para negar el derecho pensional, razones por las que la Sala considera que en el caso planteado, no hay lugar a condena a intereses moratorios, pues estos intereses en algunas situaciones no operan de forma automática, y así lo tiene entendido la jurisprudencia del trabajo y la seguridad social, como es el caso de la sentencia SL5362-2019, veamos:

“...Sin embargo, esta Corporación, en atención a situaciones excepcionales y particulares que la han llevado a reflexionar sobre la referida doctrina y a adoptar decisiones conducentes a

atenuar sus alcances, ha estimado que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no proceden en los eventos en que la entidad de seguridad social tenga serias dudas acerca de quién es el titular de un derecho pensional, por existir controversias entre los beneficiarios, y por ello, suspenda el trámite de reconocimiento de la prestación hasta tanto la jurisdicción ordinaria laboral decida mediante sentencia ejecutoriada a qué persona o personas corresponde el derecho...”

De este modo, se **revocará** el numeral segundo de la parte resolutive de la sentencia, que concedió los intereses moratorios, y en su lugar se acogerá la condena subsidiaria a la INDEXACIÓN DE LAS CONDENAS como mecanismo para mantener el poder adquisitivo constante de las mesadas pensionales, indexación que debe ser calculada por COLPENSIONES a partir del 21 de agosto de 2018, mes a mes y sobre cada una de las mesadas que componen el retroactivo pensional adeudado, hasta el momento en que se produzca su pago efectivo. Para liquidar la indexación la pasiva tendrá en cuenta la siguiente formula:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}$$

COSTAS PROCESALES DE SEGUNDA INSTANCIA

En esta instancia se han causado costas procesales a cargo de **COLPENSIONES**, teniendo en cuenta la desventura de su recurso de alzada. Las mismas serán en favor de la señora **MARTA ELENA ORTIZ RODRIGUEZ**; las agencias en derecho se fijan en el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para el año 2023.

VIII. – DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutive de la sentencia, que reconoció intereses moratorios, y en su lugar, ordenar la indexación de las condenas que debe ser calculada por COLPENSIONES, a

partir del 21 de agosto de 2018, mes a mes y sobre cada una de las mesadas que componen el retroactivo pensional adeudado, hasta el momento en que se produzca su pago efectivo.

SEGUNDO: CONFIRMAR dicha sentencia en todo lo demás, de conformidad a lo expuesto.

TERCERO: CONDENAR en costas procesales de segunda instancia a COLPENSIONES. Agencias en derecho: Un salario mínimo legal mensual vigente para el año 2023, en favor de la señora **MARGARITA MONTENEGRO ÁLVAREZ**, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: Se ordena la devolución del expediente al juzgado de origen.

QUINTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA